

LA MODULACIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL ITALIANA*

Néstor Iván Gualteros Trujillo**
Juan Camilo Loaiza Ortiz***

La modulación de la eficacia temporal de las sentencias de la Corte Constitucional italiana, como lo titula Augusto Martín de la Vega, es una de las modalidades o tipologías que adopta dicho máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional en Italia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas que profiere el órgano legislativo.

El presente estudio pretende dar a conocer la forma en que el Tribunal Constitucional, en virtud de disposiciones legales y constitucionales, ha proferido sentencias en las cuales, declarando la inexecutable de leyes, modula su eficacia en el tiempo, tanto de manera retroactiva así como proactiva. Para poder realizar un estudio sobre lo anteriormente mencionado, la metodología con la cual se pretende abordar la investigación es la siguiente: en primer lugar, se presentará el debate doctrinal que hay en Italia sobre esta tipología de sentencias, de aceptación por la gran mayoría de la doctrina, en el cual se muestre las críticas y la forma en que se ha entendido; en segundo lugar, con referencias jurisprudenciales de la propia *Corte Costituzionale*, se mostrará cómo se ha desarrollado este fenómeno

* Este artículo es el resultado de una indagación académica adelantada en el marco del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, acerca del estudio de las sentencias de las Cortes Constitucionales, caso Italia dentro de la metodología propuesta.

** Alumno décimo semestre de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Semillero de Investigación del Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico CREAR de la misma Universidad, miembro del Programa de Honores Rodrigo Noguera Laborde de la misma universidad.

*** Alumno décimo semestre de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Semillero de Investigación del Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico CREAR de la misma Universidad, miembro del Programa de Honores Rodrigo Noguera Laborde de la misma universidad.

en Italia y; por último, se presentarán unas conclusiones y comentarios sobre la discusión planteada.

i) Principales referencias doctrinales en Italia: el debate sobre la modulación temporal de las sentencias de constitucionalidad.

En el Estado italiano, la Corte Constitucional tiene como función “[...] la del control sobre la constitucionalidad de las leyes [...]” (Romboli, pág. 179, 1999); sin embargo, también, tiene otro tipo de funciones como “[...] la resolución de conflictos de competencia entre el Estado y las regiones y entre los Poderes del Estado, al juicio de admisibilidad del referéndum abrogativo y al proceso penal en relación con los delitos cometidos por el Presidente de la República” (Romboli, pág. 179, 1999). Ente análisis, se orientará a la primera de sus funciones, pero vale la pena aclarar que este control difiere de la forma como se lleva a cabo en Colombia, por tal motivo, merece la pena una breve explicación.

Cualquier norma llega a la Corte por cualquiera de dos vías: la primera, llamada *vía incidental*, es la propuesta por cualquier juez ordinario en el transcurso de un juicio, de oficio o a petición de parte (Romboli, pág. 183, 1999); la segunda, llamada *vía principal o directa*, es aquella en que el Estado o una región llevan la controversia a la Corte: el Estado sobre una ley regional y una región sobre una ley estatal (Romboli, pág. 179, 1999).

La vía incidental, como se explicó previamente, llega a la Corte por solicitud de un juez ordinario en el transcurso de un proceso, de oficio o a petición de parte. Sin embargo, esto tiene unas condiciones: primero, el juez puede negarse ante una petición cuando la considere infundada; segundo, la norma en conflicto debe ser importante para el transcurso del proceso; y, tercero, el juez debe tratar de darle una interpretación a la norma basada en la Constitución (Romboli, pág. 187, 1999).

Una vez surtido lo anterior, el juez “[...] adopta un auto, el cual tiene un doble efecto: el de suspender el proceso en curso [...] y el de iniciar [...] el juicio constitucional” (Romboli, pág. 187, 1999).

Este auto, se notifica a las partes del proceso ya que en Italia éstas pueden “intervenir en el proceso constitucional incidental” (Romboli,

pág. 187, 1999); igualmente se le notifica al Parlamento para “darle a conocer que uno de sus actos ha sido llevado a juicio ante la Corte, permitiéndole, de este modo, si lo estima pertinente, modificarlo antes de que la Corte Constitucional adopte una decisión” (Romboli, pág. 187, 1999); y se publica en la Gaceta Oficial de la República para que los demás jueces conozcan de que la norma está en trámite ante la Corte y se inhiban de aplicarla a sus casos hasta que haya una decisión en firme (Romboli, pág. 188, 1999).

Ahora bien, una vez la decisión está en firme, la doctrina constitucional Italiana, realizando un análisis jurisprudencial, ha establecido las diferentes tipificaciones de las sentencias de la Corte: Para el estudio que nos ocupa, se encuentran las relativas al conocido efecto temporal de poder “[...] evitar [...] los –obstáculos políticos- que podrían impedir que la Corte, aun estando plenamente convencida de la inconstitucionalidad de la ley impugnada, [...] podría trastocar el orden y la gradualidad de la actuación de los valores constitucionales o producir situaciones de mayor inconstitucionalidad [...]” (Romboli, pág. 193, 1999), lo que nos hace entender cómo, en ciertas decisiones, se deben tener en cuenta lo dinámico de las situaciones que se regulan con las leyes y los derechos que pueden adquirir las personas beneficiadas.

Respecto de la modulación temporal de los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitrucional italiana es procedente realizar las siguientes precisiones: en primer lugar, se encuentran las sentencias estimatorias que inaplican una norma hacia el futuro y; en segundo lugar, las sentencias que modulan su eficacia de manera retroactiva.

Así lo anota MARTÍN DE LA VEGA al referir que “las dudas sobre el modelo de efectos de las sentencias plasmado en el artículo 136 de la Constitución comienzan a despejarse con la inmediatamente posterior ley constitucional de 1948 (art. 1.1) y, definitivamente, tras el art. 30 de la ley 87/1953. Así, desde los inicios de su funcionamiento, la Corte contribuido con su jurisprudencia a sentar el principio de la inaplicabilidad para el futuro de la ley tras la sentencia estimatoria basada en el art. 136 Constitución, y de la retroactividad de la declaración de inconstitucionalidad, ex art. 30 de la ley 87/53 [...]” (Martín de la Vega, pág. 333, 2003).

La anterior clasificación ha sido adoptada por la mayoría de la doctrina italiana. Sin embargo, Romboli plantea que este tipo de sentencias de modulación temporal son las que él ha llamado sentencias de ilegitimidad o inconstitucionalidad sobreviniente¹. A través de esta tipología de sentencias, la Corte difiere la eficacia de las sentencias de inconstitucionalidad. Atendiendo a la clasificación expuesta anteriormente, el autor clasifica esta modalidad de pronunciamientos jurisprudenciales en dos categorías²: en primer lugar, la sentencia de ilegitimidad sobrevinida en sentido estricto, en virtud de la cual la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma por el acontecimiento de determinadas situaciones, pero los efectos de su inconstitucionalidad se surten a partir de los hechos que generaron su invalidez, por lo cual no será desde el momento de su entrada en vigor³.

Al respecto, Romboli dice que “la derogación de las reglas generales relativas a los efectos de las sentencias de admisión deriva del hecho que la ley impugnada pierde su eficacia, no desde el día de su entrada en vigor, sino en un momento posterior (aquél en que ha devenido inconstitucional), mientras que se sigue respetando el principio según el cual esta norma, con esta limitación, no puede ser aplicada en el juicio *a quo* ni en ninguno de los procesos todavía pendientes en los que la misma hubiera debido tener aplicación” (Romboli, pág. 194, 1999).

También están las sentencias de inconstitucionalidad sobrevinida por ponderación de los valores en virtud de las cuales la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma al diferir sus efectos hacia el futuro, siempre que la finalidad de la Corte es la de garantizar la tutela de ciertos valores y derechos, los cuales, de no ser garantizados por la modulación temporal, podrían generar consecuencias negativas. En estos eventos, el Tribunal Constitucional declara la

¹ Al respecto ver: Romboli Roberto. *El control de constitucionalidad de las leyes en Italia*. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 4, 2º, semestre 1999, pág. 179. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/est/est7.pdf>; Martín de la Vega, Augusto. *La sentencia constitucional en Italia: tipología y efectos de las sentencias en la jurisdicción constitucional italiana: medio siglo de debate doctrinal*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003; entre otros.

² Al respecto ver: Romboli Roberto. *El control de constitucionalidad de las leyes en Italia*. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 4, 2º, semestre 1999, pág. 179. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/est/est7.pdf>.

³ Ver sentencias 71,72, 80 y 105/1996 , 78/1997, 501/1988, 1 y 124/1991 y 288/1994).

inconstitucionalidad de la norma e impone un término para que la misma siga vigente y posteriormente pierda su eficacia. En la justificación del aplazamiento de sus efectos hacia el futuro “aparecerá como determinante el principio de gradualidad y continuidad en el desarrollo del ordenamiento. Continuidad que, considerada “un rasgo fundamental e ineludible del derecho como ordenamiento”, se entenderá como una exigencia no factual sino constitucional a tener en cuenta por el Tribunal cuando emita su sentencia” (Martín de la Vega, pág 338, 2003).

En este tipo de sentencias, la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana permite ver cómo el Tribunal Constitucional hace un llamado al Legislador para que éste dé solución a un problema normativo, el cual, por obvias razones, se soluciona modificando la ley que se cree inconstitucional. En estos casos, la Corte no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad. Por el contrario, realiza llamados al Legislador para que solvete los vacíos normativos; sin embargo, le da un término prudente en el cual deba realizar lo solicitado, so pena de proceder a declarar la inconstitucionalidad con los efectos arriba mencionados.

Una vez establecidas las formas de modulación temporal de los efectos de las sentencias constitucionales en Italia, es necesario hacer una breve mención a las críticas que un sector minoritario de la doctrina italiana ha realizado a esta tipología de sentencias.

Dos son las principales críticas que se han realizado a esta modalidad de pronunciamientos constitucionales, a saber: en primer lugar, hay una crítica de carácter técnico, según la cual se establece que, con la aplicación de los postulados constitucionales y legales, la limitación de manera retroactiva que plantea este tipo de sentencias puede operar de pleno derecho, esto es, imposibilitar que existan leyes inconstitucionales en el ordenamiento jurídico. AUGUSTO MARTÍN DE LA VEGA en su estudio sobre las tipologías de sentencias en Italia explica que “resulta obvio que el artículo 1 de la ley constitucional de 1948 exige al menos la desaplicación de la norma legal al caso “a quo”, lo que en conexión con el efecto “erga omnes” previsto en el art. 136 C., y con una interpretación sistemática del ordenamiento, implicaría una extensión de la privación de la eficacia a todos los casos anteriores aún pendientes. [...] por lo que puede

sostenerse que tan sólo con la modificación de la ley constitucional y del propio art. 136 de la C. puede obtenerse la limitación en la retroactividad que pretende la Corte para sus sentencias” (Martín de la Vega, pág 339, 2003).

En segundo lugar la crítica, desde un punto de vista político, se ha dicho que con la aplicación de este tipo de sentencias la Corte se esta arrogando un poder arbitrario y no controlable (Martín de la Vega, pág 341, 2003).

Este último punto es el eje entorno al cual tendrá que girar la discusión propuesta una vez se realice el estudio jurisprudencial de las sentencias de la *Corte Costituzionale italiana*.

ii) Principales pronunciamientos de la Corte Costituzionale

Para comprender mejor el fenómeno anteriormente expuesto es preciso hacer referencia a pronunciamientos de la Corte Constitucional italiana para poder ver de forma específica cómo es que el Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema. Tomando en cuenta, entonces, 5 pronunciamientos, se analizará la modulación temporal en cada evento.

Vale la pena aclarar que las sentencias tienen como idioma original el italiano, los apartes importantes serán en el idioma general y se realizará una traducción libre del texto.

Dentro del primer tipo de sentencias se analizarán:

a. Sentencia No. 266, de marzo de 1984.

En este caso, el Tribunal Constitucional se reúne para analizar la constitucionalidad del art.- 15 de la ley 7 de mayo de 1981⁵. Como vimos previamente, los juicios de inconstitucionalidad deben ser promovidos por cualquier juez ordinario y, en este caso, fue promovido por el Juez de Instrucción del Tribunal Militar de Bari dentro de un proceso penal por deserción indebida⁶.

⁴ Versión original, disponible en: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

⁵ art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace).

⁶ diserzione impropria.

Se solicita la evaluación de constitucionalidad principalmente para evaluar de la independencia, autonomía e inamovilidad de los jueces. Se aclara que lo relativo a los jueces ordinarios se aplica a los jueces militares y, también, los principios relativos al Poder judicial. En el momento de promulgarse la ley en comento, se remitía al ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Defensa, la facultad de nombramientos, traslados y transferencias de los jueces por un concepto no vinculante de un comité. Pero existe un contrasentido entre el artículo 1 de dicha ley: ya que prohíbe remitir al Ejecutivo el poder de decidir sobre los jueces militares.

“Con ordinanza emessa il 4 giugno 1984, nel corso di procedimento penale per diserzione impropria, il giudice istruttore presso il Tribunale militare di Bari solleva, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace).

Il giudice istruttore ricorda che la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario militare intende, in primo luogo, adeguare tale ordinamento ai precetti costituzionali sull’indipendenza, autonomia ed inamovibilità dei magistrati. Tale volontà adeguatrice trova espressione, tra l’altro, nell’art. 1, il quale sancisce che “lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l’avanzamento dei magistrati militari, sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili”. La legge n. 180 del 1981, in altri termini, dispone che siano pienamente applicabili ai magistrati militari i fondamentali principii costituzionali sulle garanzie della magistratura sia dal punto di vista meramente normativo (essendosi espressamente abrogate le disposizioni non conformi allo spirito della riforma) sia dal punto di vista amministrativo (con la costituzione di un organo di autogoverno della magistratura militare).

Senonché la disposizione transitoria di cui all’art. 15 cit. istituisce una procedura amministrativa per la quale, in sostanza, il potere di decisione sulle nomine, trasferimenti e conferimenti di funzioni ai magistrati militari viene conferito all’esclusiva competenza del Ministro della Difesa. I relativi provvedimenti sono attuati, infatti, su proposta del Ministro in base ad un parere obbligatorio ma non vincolante d’un “Comitato” che non rappresenta in alcun modo le varie componenti della magistratura militare e nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (che, nella specie, è atto dovuto): la decisione effettiva, pertanto, si attua in sede d’esercizio del potere di proposta.

Si delinea quindi un contrasto tra gli artt. 1 e 15 della legge n. 180 del 1981, in quanto la recezione della normativa sui magistrati ordinari, rendendo questa pienamente applicabile ai magistrati militari, esclude la possibilità di deferire all'esecutivo il potere di decidere su materie relative a questi ultimi”.

Por disposición expresa del artículo 15 se ordena al Parlamento la creación de un Comité que garantiza la independencia del Poder judicial militar. Pero ésto no se ha realizado habiendo pasado 6 años. No obstante tener que preguntarse sobre los derechos que se adquirieron en el término de no creación de dicho comité.

Tale “incertezza” non è, invece, ravvisabile nell’ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale militare di Bari, emessa in data 4 giugno 1984. In quest’ultima ordinanza si chiede soltanto la caducazione della disciplina transitoria di cui al primo comma dell’art. 15 della legge in esame, non ponendo in discussione né la questione della permanenza dell’effetto abrogativo prodotto dalla stessa disciplina sulla normativa anteriore all’entrata in vigore della legge n. 180 del 1981 né, tanto meno, la questione relativa alla devoluzione della materia, di cui al primo comma dell’art. 15 della stessa legge, al Consiglio superiore della magistratura e, pertanto, all’eventuale conseguente modifica di questo organo.

Ésto llevaría entonces a una gran incertidumbre. Se transcribe cómo la Corte toma este tema y cómo lo maneja.

“[...]Tali questioni non vanno poste neppure in questa sede, tenuto conto, soprattutto, della dichiarata volontà del legislatore del 1981 di disciplinare la materia relativa allo stato giuridico ed alle garanzie d’indipendenza dei magistrati militari in maniera analoga alla disciplina in vigore per i magistrati ordinari. È, appunto, l’art. 1 della legge n. 180 del 1981 (norma “generale” di modifica dell’intero ordinamento giudiziario militare di pace) che, al secondo comma, recita: “Lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza e l’avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili...”. Il collegamento tra questa disposizione ed il primo comma dell’art. 15 della stessa legge esclude che la “limitazione” di cui all’inciso “in quanto applicabili” possa riferirsi ad un’assurda “dipendenza” dei magistrati militari dall’esecutivo. Dagli articoli citati risulta la chiara volontà del legislatore del 1981 di “conformare” l’intero ordinamento giudiziario militare di pace alla Costituzione: le circostanze nelle quali è stata emanata la legge di riforma del 1981 nonché le dichiarazioni

dei relatori, in sede di lavori preparatori della stessa legge, confermano quel che, del resto chiaramente, dal testo della legge risulta in ordine alla “sottrazione”, anche dei magistrati militari, al potere (nelle materie di cui al primo comma dell’art. 15) dell’esecutivo. Tale “sottrazione” è, infatti, un corollario dell’esigenza dell’adeguazione alla Costituzione dell’ordinamento giuriziaro militare di pace.

Né è dato qui esaminare questioni, peraltro non sollevate, relative all’eventuale devoluzione delle materie di cui al primo comma dell’art. 15 della legge in discussione al Consiglio superiore della magistratura. La Costituzione, mentre per la magistratura ordinaria prevede espressamente il Consiglio superiore, disciplinandone, in maniera specifica (art. 104) la composizione, rimette, invece, al legislatore ordinario (art. 108) l’assicurazione delle garanzie d’indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali. Spetta, pertanto, alla legge provvedere in ordine alle predette garanzie: in questa sede non può che sottolinearsi che, ove la Costituzione avesse inteso “rimettere” al Consiglio superiore previsto dall’art. 104 anche l’autogoverno dei magistrati delle giurisdizioni speciali, l’avrebbe espressamente dichiarato. Né per la “razionalità” della previsione d’un unico organo d’autogoverno, per magistrati ordinari e militari, depongono la diversa origine, “logica” e storica, della giurisdizione ordinaria (tutela della generalità dei cittadini e decisioni sulla generalità delle “materie” ecc.; origine dell’esperienza “pretoria” ecc.) e della magistratura militare (tutela di particolari soggetti aventi una specifica qualità e di interessi particolarmente qualificati ecc.; trasformazione dell’originaria giustizia di Capi ecc.). Tutto ciò vale anche quando non si insista sugli eventuali mutamenti, che certo non competono a questa sede, della composizione, peraltro espressamente prevista dall’art. 104 Cost., del Consiglio superiore della magistratura [...].

Ante esto, la Corte indica que los jueces militares se deben regir por la ley vigente en cada caso, y hace referencia igualmente, a la intención que tuvo el Legislador en la creación de la ley en cuestión, aclara que la idea no fue quitarle poder a los jueces militares ni pasárselo al Ejecutivo sino la de una transición antes de la creación del órgano competente. Igualmente, en la conclusión de su pronunciamiento, dijo que se debía crear, en un periodo no menor a un año, dicho Comité, que se llamaría “Autogobierno de la Judicatura Militar”⁷, integrado por el Procurador General ante el Tribunal Militar de

⁷ autogoverno della magistratura militare.

Casación, el Presidente y el Fiscal General y los presidentes de las suboficinas de la Corte Militar de Apelaciones, para garantizar efectivamente la independencia de la Jurisdicción militar. Pero como no se ha creado aún, la Corte estableció que existía una “adición” del Poder judicial al Ejecutivo⁸ y, dentro del punto importante, que la decisión adoptada no puede afectar los actos ya realizados durante la vigencia de la ley en comento.

Va chiarito che la decisione che qui si va ad assumere non tocca in alcun modo gli atti amministrativi e giurisdizionali già posti in essere in conseguenza del disposto di cui alla norma impugnata, tenuto conto della ricordata, necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale in materia e delle difficoltà contingenti che hanno potuto “rallentare” la preindicata attuazione. Ciò che non può esser tollerato è la protrazione ulteriore dell’inerzia del legislatore nell’integralmente mandare ad effetto il chiaro, inequivocabile disposto di cui all’art. 108, secondo comma, Cost.

Entonces, dentro del análisis realizado, se establece que la Corte efectivamente declaró la inconstitucionalidad de la norma citada pero no afectó los derechos adquiridos ni los actos establecidos durante la vigencia de dicha norma, lo que claramente se establece como una modulación temporal ya que no produce efectos desde la promulgación de la ley sino desde la fecha de publicación del pronunciamiento constitucional, en virtud de no afectar la seguridad jurídica como uno de los objetivos de las modulaciones constitucionales.

b. Sentencia No. 71 de marzo de 19969

La Corte se reunió para analizar la constitucionalidad de los artículos 309 y 310 del Código de Procedimiento Penal italiano relacionado con el art. 429 de la Constitución. Esta solicitud fue realizada por el Tribunal de Catanzaro por ir dichos artículos en contra de los artículos 3, 24 y 111 de la Constitución italiana.

El asunto se refiere a la exigencia de “pruebas circunstanciales de la culpa grave¹⁰” para el mantenimiento de los regímenes cautelares

⁸ dipendenza” (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall’esecutivo.

⁹ Versión original, disponible en: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

¹⁰ gravità indiziaria di colpevolezza.

en cuanto a la libertad de las personas. Refiere el Tribunal que, en relación con la acusación, ésta se ha producido indebidamente por la existencia de indicios graves de culpabilidad. En el año 1993 se creó una reforma que abolió el requisito de pruebas en virtud del artículo 425 del Código de Procedimiento Penal italiano.

“Osserva tuttavia il giudice a quo che la riforma del 1993, che ha soppresso il requisito della “evidenza” prima sancito dall’art. 425 cod. proc. pen., non avrebbe delineato alcun parametro sui poteri valutativi del giudice della udienza preliminare, sicché nessun dato normativo comporterebbe la “asserita coincidenza del criterio della gravità indiziaria anche ai fini del rinvio a giudizio”, militando, anzi, argomenti sistematici in senso opposto”.

La Corte, en sus consideraciones, determinó que el Tribunal de Catanzaro solicitó el control de constitucionalidad de la revisión de los indicios graves de culpabilidad para decretar una medida de aseguramiento. Igualmente hizo referencia a la supresión de la palabra “evidente” del art. 425 del Código de Procedimiento Penal, que la jurisprudencia ha relacionado con la preclusión. Esto, según la jurisprudencia, viola la Constitución en la legitimidad de las medidas restrictivas de la libertad personal, igualmente y en el principio de igualdad, a más de ser contrario al art. 24 de la Constitución, ya que va en contra del derecho de defensa. Así se pronunció la Corte:

“1. - Ancorché riferite a differenti previsioni normative, le questioni che il giudice ha sollevato con le varie ordinanze appaiono fra loro intimamente connesse, avuto riguardo alla identità del *petitum* perseguito e degli argomenti addotti a sostegno delle prospettate censure: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

2. - Investito da numerose richieste di riesame e da un appello proposto avverso una ordinanza pronunciata in materia di misure cautelari personali, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, nelle corrispondenti sedi incidentali, questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono al giudice delle impugnazioni (riesame ed appello) il controllo del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio. Osserva, infatti, il giudice a quo che, a seguito della entrata in vigore della legge 8 aprile 1993, n. 105, dalla quale è derivata la soppressione della parola “evidente” che prima compariva nel testo dell’art. 425 del codice

di procedura penale, ha finito per prevalere in giurisprudenza la tesi secondo la quale, in tema di provvedimenti riguardanti la libertà personale dell'imputato, l'intervenuto provvedimento che dispone il giudizio integra motivo di preclusione in ordine alla proposizione e all'esame di ogni questione attinente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; una preclusione, denuncia il rimettente, che porrebbe le norme impugnate in contrasto con più principii sanciti dalla Carta fondamentale. Violato sarebbe, infatti, a parere del giudice a quo l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la tutela assicurata in sede di legittimità contro i provvedimenti sulla libertà personale, risulterebbe invece esclusa nel preliminare controllo di merito a causa di una presunzione di "probabile colpevolezza" insita nel decreto che dispone il giudizio. Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza, in quanto la indicata preclusione viene fatta dipendere da un provvedimento che, come il decreto che dispone il giudizio, da un lato "si pone come fatto occasionale e sopravvenuto, rispetto ai giudizi cautelari pendenti", dall'altro si presenta come "decisione preliminare a tasso garantistico non ben definito", essendo atto del tutto privo di motivazione e insuscettibile di qualsiasi controllo di merito. La normativa censurata si appaleserebbe inoltre in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché, osserva il giudice a quo restringendosi l'area delle censure proponibili proprio sul "fondamento sostanziale di merito" del provvedimento cautelare impugnato, viene ad essere "ingiustificatamente ed aleatoriamente sacrificato il diritto di difesa in relazione al bene primario della libertà".

Este artículo también mereció pronunciamiento de la Corte de Casación Penal en donde se reiteró que el art. 425 en comentario, modificado por la Ley 105 de 1993, ampliaba los méritos en las audiencias preliminares, en donde se constata de manera positiva la existencia de elemento que aumentan la "probabilidad cualificada de culpabilidad"¹¹. Para el análisis de inconstitucionalidad, se estableció que el análisis no podía hacerse de una manera rigurosa en cuanto a la medida sobre la libertad, ya que los indicios graves de responsabilidad se podían aportar en cualquier momento del proceso, por lo que se estableció el principio de absorción por el que sólo se puede intervenir si se producen méritos para apreciar indicios graves de culpabilidad. Por lo que los cambios del art. 425 del Código de Procedimiento Penal, que suprimen del adjetivo "aparente",

¹¹ qualificata probabilità di colpevolezza

producen un incremento en las decisiones de afectación de la libertad. Y, como expresa la Corte, estos graves indicios de culpabilidad afectan las apelaciones de libertad en el derecho de defensa, por lo que se declara la inconstitucionalidad de dicha normatividad, desde el momento de su expedición.

“Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l’ apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti di libertate. Il tema del presente giudizio di costituzionalità sta dunque tutto nell’ esaminare se il decreto che dispone il giudizio emesso all’ esito della udienza preliminare possa ritenersi o meno rispondente a un simile postulato.

Può subito osservarsi, a tal proposito, che il decreto previsto dall’ art. 429 del codice di procedura penale, non a caso strutturato dal legislatore come provvedimento di impulso processuale nel quale è carente l’ indicazione dei “motivi” che lo sostengono, equivale ad un enunciato giurisdizionale che afferma, in positivo, la necessità del dibattimento e, in negativo, l’ inesistenza dei presupposti per l’ adozione della sentenza di non luogo a procedere, sicché è del tutto ovvio che le modifiche subite dall’ art. 425 del codice di procedura penale, come d’ altra parte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità di cui innanzi si è detto, inevitabilmente si riflettano sull’ “area” di valutazione del merito che quel decreto è oggi in grado di esprimere. Non v’ è dubbio, quindi, che la soppressione dell’ aggettivo “evidente”, che prima circoscriveva entro angusti confini la regola di giudizio che presiedeva alla adozione delle formule in fatto della sentenza di non luogo a procedere, abbia sensibilmente aumentato la possibilità di adottare una siffatta pronuncia e, per converso, incrementato in corrispondente misura l’ apprezzamento che, sempre in fatto, corrobora l’ alternativa scelta della *translatio iudicii*. Ma da tale pur significativo mutamento di regime non è possibile trarre la conclusione che l’ atto di rinvio a giudizio si presenti come decisione fondata su una valutazione del merito necessariamente sovrapponibile a quella che inerisce alla verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza che legittima l’ applicazione e il mantenimento delle misure cautelari personali, con la conseguenza di non poter ritenere assorbita quest’ ultima deliberazione

nella prima e, dunque, coerentemente precluso il relativo controllo nella incidentale sede del gravame cautelare.

Nell'apportare, infatti, la già evidenziata modifica all'art. 425 cod. proc. pen., il legislatore, volutamente evidentemente inteso mantenere nettamente separate fra loro le due pronunce, non soltanto sul piano funzionale e degli effetti che dalle stesse scaturiscono, ma anche - ed è ciò che qui maggiormente rileva - sotto il profilo dei differenti elementi strutturali che caratterizzano i corrispondenti "giudizi". Mentre, infatti, nel quadro di una valutazione comparata degli artt. 425 e 530 cod. proc. pen. possono ritenersi fra loro assimilabili le ipotesi di prova positiva dell'innocenza e quella speculare di totale assenza di prova della colpevolezza, di talché la medesima situazione di fatto è idonea a determinare, su di un piano di sostanziale simmetria, la sentenza di assoluzione in dibattimento e quella di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, non altrettanto è a dirsi in tutte le ipotesi in cui la prova risulti invece insufficiente o contraddittoria. In tal caso, infatti, alla sentenza di assoluzione imposta dall'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., non corrisponde un omologo per la sentenza di non luogo a procedere, ma una più articolata regola di giudizio che deve necessariamente tener conto della diversa natura e funzione che quella pronuncia è destinata a svolgere nel sistema. L'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 cod. proc. pen., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Da ciò consegue che, ove la prova risulti insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere potrà dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria. Ove ciò non accada, quindi, risulterà scontato il provvedimento di rinvio a giudizio che, in una simile eventualità, lungi dal rinvenire il proprio fondamento in una previsione di probabile condanna, si radicherà null'altro che sulla ritenuta necessità di consentire nella dialettica del dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non chiariti.

È evidente, allora, che in siffatte ipotesi il decreto che dispone il giudizio non potrà ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che sostengono l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari personali, sicché precluderne l'esame nelle impugnazioni de libertate equivale ad introdurre nel sistema un limite che si appalesa irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di difesa, per di più proiettato nella specie verso la salvaguardia di un bene di primario risalto quale è quello della libertà personale.

Gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., così come costantemente interpretati, devono essere pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale denunciati dal giudice a quo”.

c. Sentencia No. 288 de julio de 199412.

La Corte analiza la constitucionalidad del artículo 7, párrafo 4, del Decreto-Ley 21 de marzo de 1988, n. 86 llamado “Reglamento sobre la seguridad social, empleo de los jóvenes y el mercado laboral, así como el fortalecimiento del sistema de información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”, solicitado por el Tribunal del Distrito de Lecce durante un procedimiento civil entre Errico Antonia y el INPS. Se presentaron los siguientes hechos: Antonia Errico tiene como profesión ser obrero agrícola ocasional y, accionando contra la Seguridad Social, solicitó el pago de la tasa de desempleo agrícola para el año 1988, establecida en el art. 7 de la ley en comento. Como consecuencia de lo anterior, el juez de Paz de Lecce, en fecha del 24 de junio de 1993, relacionó la inconstitucionalidad con respecto al art. 38 de la Constitución. Solicitó que, según el art. 7º, se había excluido a los trabajadores agrícolas que tenían un tratamiento especial de cualquier ajuste de desempleo, fijado en 800 libras diarios.

“Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Errico, bracciante agricola occasionale, contro l'INPS, per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura fissata,

¹² Versión original, disponible en: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dell'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del citato d.-l. n. 86 del 1988, nella parte in cui esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione un qualsiasi adeguamento dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, nella legge 16 aprile 1974, n. 114”.

La norma consideró que para los trabajadores agrícolas la compensación de desempleo debía ser por los primeros 90 días con una tasa de 40% y 66% del salario diario, y para los días restantes hasta los 270 días de una tasa de 800 libras. Se mencionó que existió una sentencia en el año 1988, número 497, de la cual el demandante no podía beneficiarse ya que esta sentencia declaró la inconstitucionalidad del art. 13 del Decreto-Ley No. 30 de 1974, en donde no se incluye un mecanismo de ajuste de la tasa según el poder adquisitivo. Pero esto entra en pugna con el art. 38 superior ya que se garantizan los mecanismo para un nivel de vida digno.

“Poiché la ricorrente non può giovarsi della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 13 del d.-l. n. 30 del 1974 in quanto non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'indennità di disoccupazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, l'ordinanza ritiene la norma impugnata in contrasto con l'art. 38 Cost., in quanto l'effettiva garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela sociale non può essere assicurata da indennità economiche di importo fisso, soggette nel tempo a svalutazione per il diminuito potere d'acquisto della moneta”.

Ante lo anterior, la Corte, en sus consideraciones, involucró un pronunciamiento del INPS en donde se sostiene que la disposición impugnada no tiene relación con el proceso del que surge la demanda de inconstitucionalidad, ya que es un caso diferente al adoptado por la sentencia 497 de 1988 pues no hay lugar a la modificación de la suma fijada en 800 libras. Sin embargo, para la Corte, este argumento no se puede compartir ya que se debe proteger el bienestar de los trabajadores y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas.

“L’argomento non può essere condiviso. Il trattamento complessivo viene in considerazione ai fini della valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze connesse alla tutela previdenziale dei lavoratori e le esigenze di salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili”.

Ante esto, la Corte declara, en consecuencia, la inconstitucionalidad de la norma con un mecanismo de ajuste del dinero para la indemnización pero después de la fecha de entrada en vigor de la ley 160 de 1988.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell’indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall’art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 23, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

d. Sentencia No. 501. abril-mayo 1988¹³.

Trata la sentencia la constitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 29 de 1976, llamada “Conectando a las pensiones de los salarios del sector público para mejorar las pensiones de los funcionarios gubernamentales y miembros de los fondos de pensiones”; también el artículo 18 de la Ley 21 de diciembre de 1978, llamada “Disposiciones para la preparación del presupuesto anual y multiestatal o Ley Financiera”; el párrafo 14 del Decreto-Ley de 30 de diciembre de 1979 sobre “Financiamiento de la Seguridad Social y la extensión de los contratos de acuerdo con la Ley de 1 de junio de 1977 “sobre el empleo juvenil”, entre otros. La acción de inconstitucionalidad

¹³ Versión original, disponible en: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

fue solicitada por el Tribunal en los recursos interpuestos por Ferruggia Carmelo y otros, también por recurso interpuesto por Francisco Hinojo.

“Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (“Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”); dell’art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)”); dell’art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (“Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile”), nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (“Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti”), promossi con le seguenti ordinanze:

- 1) ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Ferruggia Carmelo ed altri, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267- bis dell’anno 1985;
- 2) ordinanza emessa il 1° ottobre 1986 dalla Corte dei conti sui ricorsi proposti da Finocchi Francesco ed altri, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1987”.

De lo anterior se presentaron los siguientes hechos: De acuerdo a la leyes demandas se busca el pronunciamiento de la Corte en cuanto a las medidas pensionales que se extienden a los funcionarios públicos jubilados, y en especial a los magistrados, en cuanto a la compensación automática. El Tribunal de Cuentas de Ferruggia Carmelo recibe los recursos de casación que buscan el reconocimiento del derecho de reevaluación del derecho a pensión con base en la asignación prevista en la ley de 2 de abril de 1979.

“La Corte dei conti a Sezioni riunite ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1985 (R.O. n. 637/1985), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, degli artt. 2, secondo comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (“Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla

dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”), dell’art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)”), dell’art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (“Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile”), nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (“Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti”), nella parte in cui estendono ai pubblici dipendenti in pensione, e in particolare ai magistrati, la normativa concernente la perequazione automatica delle pensioni alla dinamica salariale del settore privato, secondo i meccanismi dettati dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, recidendo così ogni collegamento tra la dinamica delle retribuzioni dei magistrati in servizio e la dinamica dei trattamenti pensionistici dei magistrati a riposo.

Il giudizio de quo trae origine da numerosi ricorsi proposti davanti alla Corte dei conti da Ferruggia Carmelo ed altri, nella loro qualità di magistrati ordinari ed amministrativi e di avvocati dello Stato o loro superstiti, con i quali si chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, sulla base -e con le relative decorrenze- degli stipendi previsti dalle tabelle annesse alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e dalle successive disposizioni di legge riguardanti la categoria, oltre agli interessi corrispettivi e alla rivalutazione delle somme non corrisposte”.

Así, entonces, la Corte considera si las diposiciones demandas van en contra de los artículos 2 de la Constitución y 36 de la misma. La Corte, igualmente, estableció que en el año 1978 se estableció un último plazo dentro de un régimen de transición de acoplamiento de pensiones. La ley de 21 de diciembre de 1978 determina una corrección del 18 por ciento de aumento para el año siguiente, sin embargo se presentaron también otra serie de disposiciones que lleven a incrementos para diferentes funcionarios, lo que crea una gran cantidad de regímenes y, según palabras de la Corte, el Legislador no ha realizado la conexión de las pensiones:

“Si tratta, come è evidente, di norme a carattere transitorio, che il legislatore si propone di superare, fissando un termine temporale “non oltre l’anno 1978”.

Senonché questo dies ad quem si consuma senza il raggiungimento del programma prefissato, e sopraggiunge la legge 21 dicembre 1978, n. 843 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)”, che all’art. 18 stabilisce la misura percentuale degli aumenti per l’anno 1979 “in attesa della legge di riordino del sistema pensionistico”, e nel secondo comma estende la disposizione alle pensioni di cui all’art. 1 della legge n. 177 del 1976.

Alla fine dello stesso anno, con decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (“Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile”) convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, all’art. 14, quinto comma, l’applicazione dell’aumento percentuale di cui al primo comma dell’art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, si estende anche alle pensioni di cui all’art. 1 della legge n. 177 del 1976. Codeste pensioni sono ancora una volta richiamate per ricevere incrementi percentuali dalla legge 17 aprile 1985, n. 141 (“Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti”) all’art. 1 e all’art. 3. Gli aumenti previsti dal secondo comma dell’art. 1 sono, ai sensi del successivo art. 6, maggiorati del 20 per cento dal 1° luglio 1985, del 55 per cento dal 1° gennaio 1986 e del 100 per cento dal 1° luglio 1987.

Tutte codeste norme, per prassi delle Amministrazioni competenti confermata da interpretazione autentica del legislatore con l’art. 3, secondo comma, della legge n. 141 del 1985, sono state applicate anche al personale di magistratura e assimilato”.

Por lo anterior, la Corte determina, según sus palabras, que “desde el carácter retributivo de las pensiones se deduce que las pensiones deben ser proporcionales a la calidad y la duración de los trabajos realizado, [...] y el legislador debe aplicar el principio de proporcionalidad relacionado con la calidad y cantidad del trabajo”.

La sequenza delle norme in argomento dimostra che il legislatore non ha realizzato il programma, prefissosi nel 1976, di collegare il trattamento di quiescenza agli incrementi del trattamento del personale in attività di servizio.

In proposito la Corte non può che ribadire gli orientamenti più volte già espressi: “Dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità e alla durata del lavoro prestato; non deriva che tale trattamento debba essere

necessariamente e in ogni caso inferiore al trattamento di servizio attivo. L'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, 'un'esistenza libera e dignitosa'. Appartiene alle valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo; né la discrezionalità del legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali, nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il trattamento pensionistico venga economicamente a eguagliarsi al trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, possa essere migliore di quello goduto al momento della cessazione del servizio" (sent. n. 124 del 1968). La proporzionalità ed adeguatezza "non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta" (sentt. n. 26 del 1980 e n. 173 del 1986)".

Lo anterior lo dispone ya que se ha creado una brecha entre las pensiones y el servicio como consecuencia de la disposicon del 6 de agosto de 1984, ya que creó un beneficio para los jueces en cuanto sus servicios hasta el 30 de junio de 1983. La Corte, habiéndose pronunciado sobre este hecho, dijo que este beneficio se debía entender como compensación diferida, por el que se adaptan las pensiones a los sueldos de servicio activo, sin relación con los criterios para la estructuración de nuevos tratamientos para el pago según la Ley 426 de 1984. Se emitió la Ley 141 de 1985 para restablecer el equilibrio del sistema de pensiones desde 1976 hasta 1987, y puesto que la Ley 141 de 1985 ha permanecido y sobrevivido, se declaró la inconstitucionalidad parcial de esta Ley que se integra el contenido normativo y se limitó la equiparación de las pensiones del personal de la judicatura y la abogacía del Estado a partir del 1 de enero de 1988.

“Per il personale di magistratura il divario tra trattamenti di pensione e di servizio si è accentuato a seguito della legge 6 agosto 1984, n. 425, che ha introdotto una radicale innovazione nella struttura della retribuzione, stabilendo che lo stipendio dei magistrati in servizio alla data del 1° luglio 1983 fosse incrementato di un “beneficio”, costituito da quantificazioni corrispettive dei servizi prestati dall'ingresso in carriera sino al 30 giugno 1983.

Dato che, secondo il richiamato costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, ne consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo.

Pertanto il legislatore, intervenuto con legge 17 aprile 1985, n. 141, avrebbe dovuto perequare le pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato alle retribuzioni disposte con la suddetta legge n. 425 del 1984, e non invece stabilire rivalutazioni percentuali di pensioni pregresse del tutto estranee ai criteri adottati per la strutturazione dei nuovi trattamenti retributivi, con conseguente vulnus degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La ratio della legge n. 141 del 1985 era quella di riequilibrare un sistema pensionistico che nella sua massima estensione temporale va dal 1976 a tutto il 1987.

Poiché la legge n. 141 del 1985 ha esaurito la sua funzione perequatrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della presente decisione che, dichiarando la parziale incostituzionalità della legge suddetta, ne integra il contenuto normativo limitatamente alla perequazione delle pensioni del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato innanzi elencato, hanno inizio dal 1° gennaio 1988”.

Se decidió entonces, la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 6 de la ley 17 de abril de 1985, número 141, en la medida que, no tienen aumentos los Magistrados, administrativos, financieros, militares y fiscales del Estado ni abogados que se retiraron antes del 1 de junio de 1983, y la reevaluación por las autoridades gubernamentales a partir del 1 de enero de 1988.

“Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (“Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti”), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (“Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati”), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988”.

iii) **Discusión y conclusión**

El proceso de constitucionalidad italiano es diferente al colombiano, ya que este sólo opera ante la solicitud de parte, bien por un juez ordinario, bien por el mismo Estado o por una región, y, según esto, toma las diferentes decisiones sobre la constitucionalidad de las diferentes disposiciones que se le solicitan al dar su concepto. Estos conceptos, a su vez, tienen diferentes tipologías, y una de ellas es la modulación en el tiempo, como se expresó de las diferentes jurisprudencias que se acaban de analizar, en las que se evidencia cómo la Corte toma decisiones de constitucionalidad que se llevan a cabo ya sea en el pasado, en el futuro o desde un determinado punto, ésto para no alterar el Ordenamiento jurídico o para que sus decisiones no afecten el ordenamiento preestablecido o los derechos adquiridos previamente.

La discusión que se debe plantear está en lo que algún sector de la doctrina extranjera ha llamado como “el gobierno de los jueces”. El caso italiano permite ver cómo una Corte Constitucional, además de ejercer sus funciones establecidas en la propia Carta Política, termina apropiándose de funciones que no le son propias y desbalanceando el equilibrio armónico que debe existir entre las ramas del poder público. Un parangón ente lo sucedido en Italia y la realidad de nuestro país permite ver que los llamados Tribunales Constitucionales resultan ser órganos con funciones exorbitantes, pues en ellos radica finalmente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, pudiendo diferir en el tiempo sus decisiones.

Resulta entonces necesario limitar las atribuciones propias de las Cortes Constitucionales, pues en diversas ocasiones son éstas las que terminan imponiendo límites a la propia Constitución y al ordenamiento jurídico. Límites que, por supuesto, no han sido impuestos por el Constituyente ni por el Legislador.

Así mismo, alejándose de la disputa política que pueda generar las decisiones anteriormente estudiadas y las discusiones doctrinales, se puede observar que, de acuerdo con las disposiciones analizadas, la Corte italiana toma estas decisiones principalmente en cuestiones relacionadas con la adquisición de derechos económicos, como se vió en la Sentencia 501 de 1988, sobre las pensiones de los funcionarios

públicos, y la Sentencia 288 de 1994, sobre el seguro de desempleo de los trabajadores agrícolas, en las que siempre la decisión fue orientada a respetar los derechos adquiridos previamente por ellos, sin llegar a perjudicar su nivel de vida que según la Constitución italiana debe propender por una vida que permita la adquisición de los bienes que faciliten una vida digna. Sin embargo, no es únicamente en estos casos en los cuales la Corte ha modulado los efectos de las sentencias, pues si se recuerda, en Sentencia 266 de 1988, se estableció que se debe respetar las funciones propias de los Poderes públicos, en consecuencia, el Ejecutivo no puede tomar disposiciones sobre la elegibilidad de los jueces.

Finalmente, se puede decir que el objetivo principal es el de no ir en contra de disposiciones constitucionales con respeto de la seguridad jurídica. Aspecto que la Corte italiana toma en cuenta en este tipo de sentencias para sus disposiciones.

Referencias

- Romboli. Roberto. *El control de constitucionalidad de las leyes en Italia*. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 4, 2º, semestre 1999, pág. 179. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/4/est/est7.pdf>
- Martín de la Vega, Augusto. *La sentencia constitucional en Italia: tipología y efectos de las sentencias en la jurisdicción constitucional italiana: medio siglo de debate doctrinal*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003

Sentencias de la Corte Constitucional Italiana

- Sentenza No. 266, de marzo de 1988
- Sentenza No. 71 de marzo de 1996
- Sentenza No. 288 de julio de 1994
- Sentenza No. 501. Abril-Mayo 1988